



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE: **Heraclio Ruiz León**
DEMANDADO: **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP**
RADICACIÓN: 15 001 3333 004 2015 00057 00

I. ASUNTO A RESOLVER

Revisado el expediente se encuentra para resolver sobre la solicitud de incidente de liquidación de condena propuesto por el apoderado de la parte demandante.

ANTECEDENTES

El señor **Heraclio Ruiz León** promovió demanda a través de apoderado, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, para que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos contenidos en: **i) Resolución N° RDP N° 032226 del 23 de octubre de 2014**, mediante la cual se niega la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante y **ii) Resolución N° RDP 002294 del 21 de enero de 2015**, por el cual se resuelve el recurso de apelación contra la Resolución N° RDP 032226 del 23 de octubre de 2014, confirmando el acto impugnado.

Mediante sentencia proferida por este Despacho el día 8 de abril de 2016, se negaron las pretensiones formuladas por el actor en contra de la UGPP (fls. 248-272), concretamente se dispuso:

"PRIMERO.- NEGAR las pretensiones formuladas por el demandante HERACLIO RUIZ LEÓN contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

SEGUNDO.- No hay lugar a condena en costas por lo expuesto por el Despacho.

(...)

CUARTO.- Archivar el expediente una vez cobre firmeza la presente providencia."

Contra la decisión anterior, el apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 14 de junio de 2017 (fls. 317-328), en la que resolvió:

"PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad de Tunja con fecha 08 de abril de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(...)

TERCERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. RDP 032226 de 23 de octubre de 2014 y No. RDP 002294 de 21 de enero de 2015, por medio de las cuales

la entidad demandante negó la reliquidación de la pensión al señor Heraclio Ruiz León con la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP, reliquidar la pensión de jubilación reconocida al demandante Heraclio Ruiz León identificado con C.C. No. 6.771.902, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el año anterior al retiro del servicio comprendido entre el 01 de enero al 30 de diciembre de 2007, en la cual se tenga en cuenta como factores salariales además de los ya incluidos, la prima de riesgo, con efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2011, dado el fenómeno prescriptivo.

(...)"

A través de auto del 6 de julio de 2017¹, se obedeció y cumplió lo resuelto por el H. Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver de fondo el incidente de liquidación de condena que se estudia, se trae a colación la normatividad que regula el tema.

El artículo 193 de la Ley 1437 de 2011 establece:

ARTICULO 193. CONDENAS EN ABSTRACTO. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación. **(Negrilla y subrayado del Juzgado)**

Frente al trámite de los incidentes, el Código General del Proceso en su artículo 129 dispone:

"ARTICULO 129. Proposición, trámite y efecto de los incidentes. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer.

Las partes solo podrán promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte se correrá traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán las pruebas necesarias.

En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado por tres (3) días, vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes.

Los incidentes no suspenden el curso del proceso y serán resueltos en la sentencia, salvo disposición legal en contrario.

Cuando el incidente no guarde relación con el objeto de la audiencia en que se promueva, se tramitará por fuera de ella en la forma señalada en el inciso tercero."

¹ Ver folio 334

Se tiene entonces, que el presente incidente ha sido presentado dentro del término legal y se ha corrido traslado del mismo a la parte demandada, que no hizo manifestación alguna.

En lo relacionado al carácter concreto de las condenas impuestas en sentencias en materia laboral administrativa el Consejo de Estado ha dicho:

"Sobre este aspecto resulta ilustrativo el pronunciamiento efectuado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación el 26 de septiembre de 1990, al absolver una consulta formulada por el Ministro de Hacienda. Veamos:

-Las condenas se pronuncian in genere o se dictan en concreto. Las primeras obedecen al hecho de que en el proceso, aunque aparece acreditada la existencia del perjuicio o daño, no se halla probada la cuantía o monto de la indemnización correspondiente. En este tipo de condenas se da una insuficiencia probatoria sobre el último extremo, que deberá suplirse durante el trámite posterior.

Las condenas en concreto pueden asumir dos formas, igualmente válidas, así : a)- La sentencia fija un monto determinado por concepto de perjuicios; por ejemplo, condena a pagar \$ 1'000.000.00 ; y b)- La sentencia no fija suma determinada, pero la hace determinable, bien porque en la misma se dan en forma precisa o inequívoca los factores para esa determinación, de tal manera que su aplicación no requiere de un procedimiento judicial subsiguiente, con debate probatorio para el efecto; o bien, porque los elementos para esa determinación están fijados en la Ley, tal como sucede con los salarios y prestaciones dejados de devengar por un funcionario o empleado público durante el tiempo que estuvo por fuera del servicio. **(Negrilla y subrayado del Juzgado)**

En otras palabras, la Administración cumple las sentencias, las ejecuta dice la norma (artículo 176 del C.C.A.), una vez estén ejecutoriadas (artículo 174 ibídem). Pero ese cumplimiento se entiende sólo cuando contengan condena en concreto, en las dos hipótesis explicadas; o cuando se haya cumplido el procedimiento de liquidación y el auto correspondiente esté ejecutoriado (Condena in genere).

En estos eventos, como lo dispone el mismo código administrativo, la administración deberá adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento y es aquí donde la administración para acatar la sentencia deberá hacer las operaciones aritméticas, aplicando los factores que no requieren prueba por ser de orden legal, para determinar la cuantía de la indemnización.

En materia laboral no procede, en principio, la condena "in abstracto", toda vez que en la Ley y en los reglamentos están dados los elementos para su liquidación. Sería procedimiento inútil, dilatorio e ilegal que tuviera que hacerse condena "in genere", para luego, por una liquidación incidental dentro del proceso mismo, determinar el valor de una condena por salarios, prestaciones y demás derechos sociales, cuando estos presupuestos están forzosa e ineludiblemente señalados por la Ley.

No puede olvidarse que la presunción de derecho de conocimiento de la ley, se aplica tanto a los particulares como a los funcionarios públicos.

(...)

Con fundamento en lo expuesto la Sala responde:

1o.- El Código Contencioso Administrativo comprende dos clases de condenas, una genérica y otra específica. La primera requiere surtir un incidente para determinar la cuantía de la obligación. La segunda no necesita de incidente porque esa cuantía es determinada o determinable en la ley o en los reglamentos con fundamento en la sentencia.

2o.- Las sentencias que profiera la jurisdicción contencioso administrativa, en materia laboral, implican condenas específicas porque el valor de las mismas está determinado en las sentencias o se deduce de la sentencia en relación con las leyes o reglamentos.

En estos casos por lo mismo no hay necesidad de proferir autos que liquiden el valor de las mismas. Las condenas que no son líquidas pero sí liquidables, de conformidad con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo se cuantifican mediante acto administrativo".
(Subraya la Sala)

A partir del anterior referente jurisprudencial resulta claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se equivocó al declarar probada la inexistencia de título ejecutivo y terminar el

proceso, con fundamento en una premisa falsa, cual es que la sentencia objeto de ejecución 2 tac 3 contiene una condena en abstracto que necesariamente requería un trámite incidental de liquidación.

Basta con revisar el texto de los numerales 2° y 3° de la parte resolutive de la sentencia de fecha 26 de agosto de 1999¹⁰, mediante la cual la Sección Segunda Subsección "B" de esta Corporación declaró la nulidad del acto que había decidido la insubsistencia del nombramiento de la actora en el cargo de Auditor III ante la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana con sede en Fort Lauderdale, para concluir que estamos frente a una condena en concreto liquidable con fundamento en la ley, los reglamentos y en la información que reposa en la propia entidad demandada:

"2° La Contraloría General de la República reintegrará a la señora HERMINIA ISABEL BITAR DE MONTES, a un empleo de igual o superior categoría al que ejercía en el momento de la desvinculación, y le reconocerá y pagará los salarios y prestaciones dejados de devengar entre el día 27 de agosto de 1987 y la fecha en que sea reintegrada al cargo, emolumentos que deberán ser cancelados en dólares americanos, con los ajustes ordenados anualmente, entendiéndose para todos los efectos legales que no ha existido solución de continuidad durante dicho interregno.

3° Las sumas que se paguen en favor de la señora HERMINIA ISABEL BITAR DE MONTES, se actualizarán en la forma como se indica en esta providencia, aplicando para ello la siguiente fórmula:

$$R = Rh \times \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

La entidad demandada dará cumplimiento al fallo en los términos del artículo 176 del C.C.A., con observación de lo previsto en el artículo 177 *ibidem*¹²

Con fundamento en lo anterior, se puede concluir que existen dos clases de condenas en concreto; una en la que se determina el valor específico de los perjuicios y otra en la que a partir de ciertos factores se puede cuantificar.

Así mismo, se colige que en materia laboral no proceden las sentencias en abstracto, como quiera que la ley y los reglamentos establecen los elementos necesarios para la liquidación, ya que, en estos se señalan los salarios, prestaciones y demás derechos sociales que se pretenden reconocer.

Descendiendo al caso en estudio, se tiene que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá³, se ajusta a los lineamientos citados, y corresponde a una condena concreto, ya que, puede ser determinable, pues se ordena en ésta la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al demandante "en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el año anterior al retiro del servicio comprendido entre el 01 de enero al 30 de diciembre de 2007, en la cual se tenga en cuenta como factores salariales además de los ya incluidos, la prima de riesgo, con efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2011, dado el fenómeno prescriptivo."

No hay discusión entonces, que la condena impuesta en segunda instancia es liquidable a partir de los factores conocidos y que fueron certificados durante el trámite del presente medio de control.

De la misma forma, la actualización de los valores reconocidos se hará conforme a la fórmula matemática indicada en la sentencia del H. Tribunal Administrativo de Boyacá, y se efectuarán los descuentos que no se hubieran realizado al Sistema General de Pensiones, durante los últimos cinco (5) años de la vida laboral del demandante.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, en sentencia del doce 12 de mayo de 2014, Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00435-02(1153-12)

³ Ver folios 317-328

381

Teniendo en cuenta, que ya se aprobó la liquidación de gastos elaborada por la Secretaría del Despacho, y sin existir trámite pendiente por cumplir, una vez en firme esta providencia archívese el proceso.

Por lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el incidente de liquidación de condena, propuesto por el apoderado de la parte demandante, por lo expuesto previamente.

SEGUNDO: Una vez en firme esta providencia, **ARCHÍVESE** las diligencias del presente medio de control, dejando las constancias respectivas.

Notifíquese y cúmplase.

LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
Jueza

⁴ps.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° 20 De Hoy 20 de abril de 2018 A LAS 8:00 a.m.
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

⁴ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 20 de abril de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario